

## **Banco de España**

### **Exposición elevada a las Cortes por el Consejo de Gobierno del banco de España con motivo del Proyecto de Ley presentado en 22 de enero último por el Ministro de Hacienda / Banco de España**

Madrid : Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández,  
1902

Signatura: D-26902

La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

<http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html>

#### **Aviso legal**

*Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de lucro siempre y cuando se cite la fuente*



EXPOSICIÓN ELEVADA Á LAS CORTES

D-26902

POR EL

# CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA

CON MOTIVO DEL

PROYECTO DE LEY PRESENTADO EN 22 DE ENERO ÚLTIMO

POR EL

SR. MINISTRO DE HACIENDA

MADRID

IMPRENTA DE LOS HIJOS DE M. G. HERNÁNDEZ

Libertad, 16 duplicado, bajo.

1902









1 000000 738148

D 26902



EXPOSICIÓN ELEVADA Á LAS CORTES

POR EL

CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA

CON MOTIVO DEL

PROYECTO DE LEY PRESENTADO EN 22 DE ENERO ÚLTIMO

POR EL

SR. MINISTRO DE HACIENDA

---

MADRID

IMPRENTA DE LOS HIJOS DE M. G. HERNÁNDEZ

Libertad, 16 duplicado, bajo.

1902

EXPOSICIÓN ELEVA A LAS CORTES

Por el

CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA

CON MOTIVO DEL

PROYECTO DE LEY PRESENTADO EN 22 DE ENERO ÚLTIMO

Por el

SR. MINISTRO DE HACIENDA

MADRID

IMPRESA DE LOS REYES DE S. C. HERNÁNDEZ

En Madrid, 16 de febrero de 1902

1902



## À LAS CORTES:

Considera el Banco de España propio de su deber, nacido de las funciones que le están encomendadas, acudir á las Cortes del Reino para exponer respetuosamente ante ellas su opinión sobre el proyecto de ley que, con fecha 22 de Enero próximo pasado, presentó el Ministro de Hacienda, alterando la constitución de dicho Establecimiento. Aunque éste, por los intereses que le están confiados, invocará derechos que le asisten y que tienen su sanción en pactos solemnes, legalmente aprobados, ha de inspirarse á un tiempo mismo en el bien público, que tuvo siempre muy en cuenta, para hacer, con el debido acatamiento, que no es menor que su profunda convicción, algunas observaciones sobre dicho proyecto.

No ha querido el Sr. Ministro que preceda al proyecto referido una extensa exposición, que diera á conocer los fundamentos de la reforma, limitándose á la indicación de que considera llegado el momento de acometer directamente la empresa de reducir á límites prudentes la circulación fiduciaria, asentando ésta al propio tiempo sobre una base sólida y racional. Lamenta el Banco que no se desenvuelva más concretamente el pensamiento, de suerte que, por el estudio de las condiciones económicas del país, de la situación monetaria del mismo, del importe de los billetes en circulación, de la relación que guardan con

las necesidades mercantiles é industriales, de los efectos que se hayan producido, de las causas que los hayan determinado, de las ventajas ó inconvenientes de los sistemas que están en práctica en los diferentes países para dar mayor garantía al billete y, por último, de los beneficios que se esperan de la reforma y la gradación con que debe ser desenvuelta, pudiera apreciarse todo el alcance y transcendencia del proyecto.

Aun estimándolo sólo en sus tendencias, el Banco ha de permitirse indicar al Gobierno de S. M., con todos los respetos debidos, que resultaría ineficaz y pudiera ser contraproducente si, por su medio, se aspira á corregir el curso de los cambios. Sin duda alguna, deberá reconocerse que el Banco de España, en razón de sus servicios y de su historia, es una institución que interesa á todo el país, á cuya grandeza y prosperidad no puede ser indiferente el crédito de que goce. Por esto, en un dictamen emitido por una Comisión parlamentaria francesa se dice «que fortificar estos grandes cuerpos (se refiere al Banco de Francia) es fortificar al país, al que pueden servir de apoyo». Desgraciadamente el proyecto, aunque no sea ésta su intención, debilita al Banco de España; pues, refiriéndose á una organización establecida por leyes paccionadas y mediante condiciones que por el Banco han sido religiosamente cumplidas, intenta su alteración sin haber obtenido el consentimiento de una de las partes contratantes.

El Banco de España no puede menos de exponer en este punto cómo tal conducta contradice principios legales, que tienen su base en el derecho natural, y se asientan además en la conveniencia pública de dar estabilidad á los derechos que de las leyes se derivan. En este supuesto, el proyecto de que se trata no tiene para nada en cuenta los que á favor del Banco y por títulos onerosos han establecido dis-



posiciones de que prescinde y que conviene sucintamente recordar.

El art. 17 de la de 1874, fecha en que es bien sabido que el interés de las operaciones del Tesoro no bajó, y subió mucho más, del 12 por 100, obligó al Banco á anticipar al mismo Tesoro 125 millones de pesetas en *compensación* de las facultades concedidas á dicho Establecimiento por aumento de capital y de emisión, prolongación de su privilegio y fusión de los Bancos de provincia, anticipo que el Banco hizo inmediatamente, según se le demandó, y que se realizó al interés de 6 por 100.

El art. 4.º de la ley de 1891, al aumentar la facultad de emisión de billetes al portador, cuando la demanda de ellos no podía satisfacerse con los estrechos límites de la ley anterior, obligó al Banco á anticipar 150 millones de pesetas, pero sin interés alguno, y además de no reclamar su pago y reintegro durante treinta años «*en compensación* de las concesiones que se le otorgaban». Á más de esto, se le imponía el deber de «conservar siempre en sus Cajas en metálico, barras de oro ó plata, la tercera parte, cuando menos, del importe de los billetes en circulación, y la mitad de esta tercera parte precisamente en oro».

El Real decreto de 9 de Agosto de 1898 le obligó á conservar en sus Cajas oro y plata por el aumento de emisión; la mitad, si los billetes en circulación excedían de 1.500 millones y no de 2.000, y las dos terceras partes si excedieran de 2.000 millones de pesetas y siempre en oro la mitad de estas reservas; previsión y gravamen cuya importancia debe considerarse á la luz de las críticas circunstancias que en aquellos días atravesaba España y que demuestran qué enormes sacrificios impuso al Banco dicho gravamen.

Por último, la ley de 2 de Agosto de 1899 y el convenio firmado en el mismo día, restringieron á 2.000 millones la facultad de emisión, consignando en la base 3.ª *la compensación* pedida al Banco y la declaración de que no se exigirían otras nuevas.

Hay, pues, contratos bilaterales en cada una de esas leyes, contratos de la clase de los onerosos, que crean derechos y deberes recípro-

cos, libremente pactados y sancionados por el Parlamento y la Corona. Las concesiones del Estado tuvieron su precio concertado y pagado religiosamente por el Banco de España. Retirar esas concesiones compradas y pagadas, reteniendo al mismo tiempo su precio, véase si en el orden legal y aun en el moral, ni en el orden público, ni en el privado, es lícito y honesto para ninguna de las partes contratantes, por alta y poderosa que sea cualquiera de ellas.

Pero no solamente por el proyecto de ley en cuestión parece que se rompen contratos libremente pactados, sino que se anula, en perjuicio del Banco, el derecho común establecido en el Código de Comercio, que ampara á todos los ciudadanos españoles. El art. 179 consigna el derecho adquirido por el Banco de España, cuyo privilegio conserva, y por lo tanto sanciona; y al determinar en la Sección octava del título 1.º de su libro 2.º, las condiciones de los Bancos de emisión y descuento, establece la esencia de estas Sociedades mercantiles en dos principios cardinales: 1.º, la conservación en Caja de una cantidad equivalente á la cuarta parte del importe de los depósitos y de las cuentas corrientes á metálico y de los billetes en circulación; 2.º, que el total importe de los billetes, de los depósitos y de las cuentas corrientes no exceda de las reservas metálicas y los valores en cartera á noventa días.

Estas condiciones desaparecerían por el proyecto y, como queda dicho, se faltaría, hiriendo el derecho del Banco, á los contratos solemnemente otorgados.

¿En qué se funda esta novedad y por qué se prescinde del consentimiento del Banco de España? No se invoca, ni podría invocarse para ello, un motivo de interés público puesto en peligro por la conducta del expresado Establecimiento, al que no puede en modo alguno imputarse que haya acrecentado irreflexivamente la circulación de sus



billetes, movido por los estímulos de su particular conveniencia. El Banco ha expuesto respetuosamente al Gobierno, en distintas ocasiones, la de no acudir al mismo con nuevas demandas de recursos; pero, cumplido su deber, creyó que, en las circunstancias luctuosas por que el país ha atravesado, no podía negar al Tesoro su concurso y la ayuda eficaz de su crédito, con los cuales ha salvado difíciles y apuradas situaciones.

Así, á la petición de un anticipo para Ultramar, hecha por el Ministro de Hacienda en Real orden de 12 de Abril de 1897, de 65 millones de pesetas en pagarés renovables, contestaba el Consejo que, en su concepto, *podiera ofrecerse la operación al público con preferencia*; pero en vista de que los pagarés de Ultramar, con interés de 6 por 100 y garantía de billetes de Cuba que habían vencido en aquel mes, *no habían sido renovados en su mayor parte, se comprendía que no sería posible colocar en el mercado nuevos valores de esta especie en los momentos actuales*, y, por lo tanto, no había de negar el Banco su concurso al Gobierno de la Nación, hasta el límite que su situación se lo permitiese. De modo análogo respondía á otra Real orden de 14 de Abril del mismo año, invitando al Banco para que aceptara los pagarés del Ministerio de Ultramar, de la primera serie de la negociación de 80 millones de pesetas, que no se renovaran por sus tenedores. Á una Real orden de 5 de Noviembre del año indicado, pidiendo un anticipo para Ultramar de 36 millones de pesetas, contestaba el Consejo que prestaba su conformidad, *teniendo presentes las difíciles circunstancias por que atravesaba el país y confiando en que los propósitos del Gobierno de S. M. habían de ir encaminados á la conveniencia de no repetir, por ahora, esta clase de operaciones, por los importantes motivos que no pueden ocultársele y que ya le han sido expuestos en diferentes ocasiones por el Banco*. De notar es que, con fecha 18 de Febrero de 1898, contestó á otra Real orden de 21 de Enero, pidiendo que el anticipo de 40 millones, concedido en 22 de Enero se ampliara en 80 millones más, manifestando la situación en que *se colocaba al Banco de España, haciéndole aumentar considerablemente la emisión de los billetes, que de esa suerte*



*no tardaría en acercarse al límite legal.* En otras comunicaciones vuelve el Banco á llamar la atención sobre las ventajas de acudir á una negociación pública, siendo, pues, evidente que la situación hoy creada no le es en manera alguna imputable; pues ni siquiera omitió aquellas respetuosas observaciones que podían ser apreciadas debidamente por los Gobiernos.

Satisfechos con esta conducta nobles estímulos de patriotismo que siempre le guiaron, si recuerda ahora los servicios prestados entonces y las advertencias dirigidas, es para dejar sentado que su cartera del Tesoro no ha surgido por demandas ó solicitudes que formulara, sino por peticiones y requerimientos del Estado, á pesar de esas advertencias. Indicarlo sólo, es demostrar á las Cortes que el Banco de España no ha dado motivo ni ocasión para pretender que se altere la organización que ha recibido de leyes y de disposiciones vigentes, y que si la composición de su cartera fuese la causa determinante del deseo de una innovación, parece que ésta es innecesaria y puede, pasados ya los tristes momentos en que hubo necesidad de su crédito para remediar graves situaciones de la Nación, reintegrarle sus anticipos, siguiendo análoga conducta que el Gobierno francés adoptó, por lo que se refiere al Banco de Francia, en circunstancias semejantes; criterio en el que, sin duda, se ha inspirado la ley autorizando la emisión de obligaciones y en el que se inspiraba también el Sr. Allendesalazar, al presentar su proyecto sobre consolidación de la deuda de Ultramar.

No se apoya el Banco de España, al dirigir esta demanda respetuosa á las Cortes, solamente en el derecho que le asiste, y que es tanto más respetable cuanto puede invocar la historia de los servicios apuntados. Es, además, el interés del Estado y de todo lo que afecta á su crédito, mantenido por el respeto religioso á sus compromisos y por el fiel y leal cumplimiento de los pactos que celebra, sin lo cual nacen

el temor y la incertidumbre y padece la confianza que debe inspirar á todos. Tanto más doloroso sería en este caso prescindir de esta consideración, cuanto que, no obstante la rectitud de intención del Gobierno y el noble anhelo que persigue, resultaría más ineficaz y contraproducente el proyecto presentado á las Cámaras.

Parece inspirarse en el acta inglesa de 1844, debida á Roberto Peel, considerada por algunos como un monumento que atestigua la gloria de su autor y que ha contribuído á la prosperidad y grandeza de Inglaterra; mientras que otros estiman que fué una medida circunstancial, que sólo ha podido subsistir merced á esa prosperidad y grandeza, extrañas al acta misma, la cual fué preciso infringir en diferentes ocasiones por virtud de crisis engendradas por la necesidad de un aumento de circulación. Por eso se la ha combatido, por su falta de elasticidad, por la carencia de medios para hacer frente á las crisis comerciales, porque no contiene en sí misma la virtualidad necesaria para conseguir del crédito todas las ventajas sociales que puede lograr una Administración previsora, discreta y diligente, que estudia con atención las necesidades del país, que atiende á la modificación que sufren y que procura satisfacerlas en cada instante, evitando todos los peligros que pueden originarse de una circulación deficiente ó excesiva. Además, con el sistema inglés, los peligros para el Banco, dados el límite infranqueable de su facultad de emitir y las violentas expansiones de la circulación, obligan á éste á defender las reservas con la elevación de los tipos de descuento, originaria de fluctuaciones del interés, las cuales ejercen una influencia perniciosa en la economía del país y en España, que ahora inicia una nueva vida mercantil é industrial, serían por todo extremo perturbadoras.

Estas dolorosas alteraciones no ocurren con tanta frecuencia en Francia, ni en otros países que han fundado sobre la base allí establecida sus Bancos de emisión y que, debido á ella, han podido salvar hondas crisis. Por esto son muchos sus partidarios, pensando con razón algunos que la garantía verdaderamente eficaz contra el exceso de emisión sólo puede encontrarse en la prudencia de una Administra-



ción, que ocupa una posición eminente en el país y se halla fortalecida por sus tradiciones y su historia. Pero sea de esto lo que quiera, es lo cierto que si el acta de 1844 tiene en sí misma los inconvenientes que se dejan apuntados, es además completamente inadaptable á nuestro país y de todo punto ineficaz en estos momentos, en que no se trata de conservar la moneda de oro en la circulación, sino de adquirirla, fin que no se logra por el establecimiento de disposiciones legales relacionadas con los sistemas monetarios, sino mediante la actividad social, ayudada por una prudente y sabia política del Estado.

Es, además, de tener en cuenta que, si debe procurarse constantemente fortalecer á las instituciones de crédito, que alguien indica que son como los principales órganos del cuerpo social, que conservan ó crean su riqueza y su poder, no ha de llevarse á ellas alteraciones y reformas que aminoren el respeto y la confianza que han sabido conquistarse, y merced á los cuales pudieron prestar al Estado y al país servicios eminentes, ni que se pretenda en su constitución modificaciones que ya la historia acreditó de inconvenientes.

Así, en la exposición con que se presentó á las Cortes, en 30 de Enero de 1851, el proyecto de ley de reorganización del Banco Español de San Fernando, decía con su autoridad indiscutible un ilustre Ministro, el Sr. Bravo Murillo, lo siguiente: «Otro embarazo encuentra la ley del Banco en la disposición del art. 16 de la ley de 1849, que le divide en dos distintas secciones: una de emisión y otra de descuentos. Si esta división ha de ser efectiva, imprescindible es la existencia de dos Cajas con fondos y contabilidad enteramente separadas». «Justo y conveniente es, añadía, que se exijan garantías de la emisión en los Bancos; pero para nadie puede ser dudoso que ésta se halla mucho mejor garantida con una existencia en metálico, que, según la ley de 1849, no puede bajar de la tercera parte del importe de los billetes en circulación, y con valores realizables en plazos á lo más de noventa días, que con créditos sin vencimiento fijo, é irrealizables por consiguiente en los casos de conflicto, para los cuales deben estar cons-

tantemente preparados los Bancos. Estos establecimientos necesitan además en sus operaciones grandes facilidades, que sólo pueden encontrar en la centralización de su administración y contabilidad, con lo cual no se aviene bien la división establecida, que obliga, no sólo á mantener separadas dos Cajas con una existencia metálica considerable en cada una, sino también los valores de una misma especie, con la necesidad de cambiarlos casi diariamente de una á otra Caja, según les va llegando su vencimiento; división que, sin embargo, se establecía acertada y oportunamente en dicha ley, atendidas las circunstancias que entonces convenían, y que, afortunadamente, han desaparecido.»

Pero, además de que la experiencia demostró en España los inconvenientes del sistema, la separación que hoy se pretende, rompiendo la unidad del Banco y afectando á intereses garantizados por la ley, sería opuesta á los principios de derecho, según los cuales todo el activo del Banco responde á su pasivo. Y sobre ser contrario á la justicia el deslinde pretendido, sería de todo punto inconveniente, porque, debilitada la confianza de los cuentacorrentistas, éstos querrían hacer efectivos sus derechos, dando de esta suerte origen á un aumento de circulación. Hasta los billetes mismos, que hoy se hallan garantizados con todo el activo del Banco, verían de igual modo disminuída su garantía, inconveniente tanto más de apreciar cuanto es mayor la confianza que hoy inspiran, aceptados, como son por todos, sin protesta alguna.

No cumpliría el Banco con su deber si no llamara la atención de las Cortes, para que en su sabiduría aprecien esta observación de la manera que mejor estimen, hacia la tendencia misma del proyecto de reducir la circulación fiduciaria. Es éste un punto esencial que merece ser meditado con la debida detención:



Sabido es que todos los países necesitan para sus transacciones una cantidad de moneda efectiva ó signos subrogados, necesidad que es mayor ó menor, según que la circulación se acelere más ó menos y presten servicios más ó menos multiplicados iguales cantidades de moneda. Por eso se ha dicho que «los países pobres y atrasados tienen, relativamente á la suma de cambios que efectúan, necesidad de una cantidad mayor de signos monetarios, lleven ó no consigo su garantía, sean de metal ó de papel». No puede ser dudoso, por tanto, que si la circulación no está excedida, que si los billetes, obrando como instrumentos de cambio necesarios á la economía nacional, se retiran violentamente, no siendo reemplazados con oro, puede darse origen á profundas perturbaciones y á crisis lamentables.

Pues bien, en tal sentido considera el Banco que no podría dejarse de estimar que, si la circulación fiduciaria ha aumentado por los anticipos que hizo al Tesoro, esos billetes difundidos ya por el país permanecen en él, indicando esta persistencia la necesidad que de ellos tiene el mercado. Y se comprende que así sea, porque es harto notorio á todos que ha salido de España en los últimos años una gran cantidad de oro, que ha tenido que ser reemplazada con el billete. Puede, por tanto, observarse que, no obstante la elevación del tipo de descuento y de haber pagado el Tesoro al Banco 117 millones de pesetas, la circulación no ha disminuído, antes ofrece en los últimos tiempos un aumento. Esto demuestra que, si es loable la ley que autorizó al Gobierno á la emisión de obligaciones para recoger los pagarés del Banco, y que si esta conducta demostraría el propósito de acreditar que los billetes no responden á una necesidad del Gobierno, retirar de un modo fatal y violento de la circulación los billetes, aun siendo necesarios, puede engendrar una rarefacción mucho más temible que el efecto de una abundancia excesiva de moneda fiduciaria; peligro todavía mayor en estos momentos, por los numerosos negocios que



se han iniciado, que se están implantando en España y que exigen un aumento en la circulación.

Por las consideraciones brevemente expuestas, abriga el Banco de España el convencimiento profundo de que las Cortes estimarán, que el proyecto de 22 de Enero no salva derechos respetabilísimos nacidos de solemnes contratos y que tienen su amparo en la ley, ni conveniencias públicas que marchan paralelas con las de aquél; pues no puede ser al país indiferente el crédito de una Institución que favorece y ayuda el desenvolvimiento de su riqueza, ni el interés, en suma, del Estado, que se afianza en el respeto á los contratos que celebra, y al que tampoco puede ser indiferente la suerte de una Institución, que le auxilió siempre que hizo un llamamiento á su patriotismo. Si, además, se considera inadaptable á España el acta de 1844, si se admite que es suficiente para demostrarlo la experiencia de 1849, si se reconoce que no sólo sería perjudicial, sino opuesta á los principios de derecho la división del Banco en dos departamentos, haciendo una separación del activo y del pasivo del mismo, y si, finalmente, se admite que una violenta é inoportuna restricción de billetes podría originar una honda perturbación en la vida económica del país, habrá de concluirse que es inaceptable totalmente el proyecto, y holgará, en tal supuesto, el análisis de sus artículos.

Pero, con el debido respeto, el Banco de España ha de exponer, sumaria y brevemente, algunas consideraciones acerca del mismo, sometiéndolas, confiado, á las Cortes del Reino.

Llama desde luego la atención la redacción del art. 2.º, según el cual el activo del departamento de emisión quedará constituido, entre otras cosas, con los pagarés del Tesoro á 2 1/2 por 100 de interés que el Banco tiene en cartera, por la ley de 2 de Agosto de 1899, y los efectos de Deuda del Tesoro representativos del anticipo, sin interés,

hecho por virtud de la ley de 14 de Julio de 1891. Si de este modo se pretendiera dar fijeza al interés antes estipulado con el Banco de España, sería contrario á todos los principios de derecho; pues tanto el anticipo á que se refiere el núm. 2.º de dicho artículo, como el reducido interés de los pagarés que expresa el párrafo primero, fueron pactados por vía de *compensación* á los beneficios que se otorgaban al Banco.

Así es que el art. 4.º de la ley citada de 14 de Julio de 1891 decía literalmente: «En compensación de estas concesiones (las de emisión y prórroga del Banco) el Banco de España anticipará al Tesoro público 150 millones de pesetas, por los que no cobrará interés, ni tendrá derecho al reintegro hasta el 31 de Diciembre de 1921.» Á su vez, en el convenio celebrado en observancia del art. 7.º de la ley de 2 de Agosto de 1899, se dispuso que «el Banco de España, en *compensación* de los beneficios que pueda reportar de las disposiciones de la ley de 17 de Mayo citado, que autorizó la emisión hasta 2.500 millones de pesetas, reduciría el interés de los pagarés á noventa días que conservase en cartera, procedentes de Ultramar, y de la cuenta de crédito con garantía de igual procedencia, por 50 millones de pesetas, al tipo anual de 2 1/2 por 100». Este interés podría elevarse cuando lo exigieran las circunstancias, pero «no exigirá nuevas compensaciones de parte del Banco cualquiera ulterior ampliación de la emisión fiduciaria hasta el límite de la ley de 17 de Mayo de 1898, compensados, como quedan de antemano en toda su extensión, los beneficios que de dicha ley pueda reportar el Banco, según se declara en el párrafo primero de la presente base».

Tan claros y tan explícitos son los términos de estas disposiciones y tan evidentes los motivos en que se apoyaron, que al pretender, con manifiesta infracción, no sólo de su texto legal, sino de la recta noción de justicia, la derogación de los convenios á que se ha hecho referencia, no puede menos de reconocerse que esas disposiciones quedarían anuladas, y que sería de todo punto indispensable la conformidad del Banco para determinar el interés que ha de abonársele



por los anticipos que tiene hechos al Tesoro, dado que subsistan.

Asimismo se ve precisado el Banco de España á llamar la atención de las Cortes acerca de la constitución del activo del departamento de emisión. Por de pronto, no se considera formando parte de él la Deuda del Estado, cuando no se puede olvidar, aparte de la índole de la misma y de la garantía que supone, el origen de su existencia en el Banco de España. Bien sabido es que éste, prestando un señalado y eminente servicio al Estado, tomó en firme la operación de amortizable, que debía haber quedado terminada en 1921, fecha á la cual se extendió la prórroga del privilegio. Á pesar de las circunstancias en que el Banco tomó aquella operación, se le obligó después á canjearla por Deuda consolidada, y hoy pretende excluirla del departamento de emisión, lo cual no reputa el Banco equitativo, pues hasta se prescinde ó se olvida que el art. 10 de la ley de 27 de Marzo de 1900, fijando las bases para la conversión de las Deudas del Estado, dispuso que, los títulos de renta perpetua que el Banco de España recibiera por resultado de la operación, se computarían como cartera, á los efectos del art. 5.º de la ley de 14 de Julio de 1891, por un valor igual á aquel que satisfizo el Establecimiento por los títulos de 4 por 100 amortizable.

Aparte de esto, no podrá menos de repararse en la forma que intenta constituirse el activo del departamento de emisión, según la cual, si llegara á pagarse al Banco de España todos los anticipos del Tesoro, sólo quedarían como Deuda en dicho activo 150 millones de pesetas. Ahora bien, como una cantidad de metálico muy superior á ésta habría siempre de existir en el departamento de Banca para atender á las operaciones del mismo, el Banco de España sería el único en el mundo que no pudiera emitir y poner en circulación billetes en igual cantidad á la del metálico de que dispusiese. Indicar esto solamente es demostrar que, reducido el Establecimiento á un Banco de depósito, no podría prestar al país el beneficio de un Banco de emisión y descuento, que abarata el dinero, disminuye el interés y fomenta la producción.

La organización, pues, que intenta darse al Banco de España es contraria á los buenos principios económicos, é impediría obtener aquellos beneficios naturales que deben esperarse de instituciones de crédito bien establecidas, tanto más necesarias entre nosotros, cuanto más distantes nos hallamos de los progresos alcanzados en este punto por otros países, y cuanto mayor es acaso la necesidad de instrumentos de cambio, por nuestros malos hábitos económicos.

De prevalecer el proyecto, habría que pensar también en un peligro que pudiera derivarse de reducir la circulación á la cifra de 1.400 millones, ya por la creación y el uso de nuevos signos de crédito, ya porque salieran en busca de una ocupación billetes hoy atesorados, ya por otras causas. En efecto, según el art. 2.º del proyecto, en el supuesto de una circulación de 1.400 millones, el activo del departamento de emisión quedaría constituido en esta forma:

Pagarés del Tesoro.....	900 millones.
Anticipo del Banco....	150 »
Oro .....	350 »
<i>Total</i> .....	<u>1.400 millones.</u>

Y como por dicho artículo y su núm. 4, la moneda de plata sólo se admite para completar la cantidad de billetes, obligándose á mantener el oro que el Banco tiene actualmente en su Caja, claro es que, disponiendo el párrafo final del expresado artículo que el Departamento de emisión está obligado á cambiar los billetes á metálico, y que el activo á que se refiere queda exclusivamente afecto á garantizar los billetes emitidos, éstos se presentarían á su conversión, y el Banco se vería obligado á entregar oro y á reemplazarlo después, con la consiguiente elevación de los cambios.



Por último, se ha dicho antes que es contraria á derecho é inconveniente á todos la escisión que se pretende hacer del Banco, y, por tanto, la de su activo, que responde hoy, en su integridad, á todas las obligaciones del pasivo, sin que pueda disminuirse la garantía que todas tienen en virtud de disposiciones legales.

El art. 3.º establece que, á medida que el Gobierno recoja, satisfaciendo al Banco su importe en efectivo, pagarés del Tesoro de los que constituyen el activo del departamento de emisión, recogerá y cancelará éste una cantidad igual de billetes. Se expuso antes que la circulación activa del billete, obedeciendo á necesidades del mercado, no se disminuye en la proporción que el Tesoro satisface al Banco sus anticipos, y en tal concepto, el Banco, para recoger sus billetes, tendría necesidad de elevar el descuento ó realizar su cartera.

En efecto, tiene dicho Establecimiento el siguiente activo comercial:

Descuentos.....	205 millones.
Créditos personales.....	40 »
Préstamos.....	112 »
<i>Total.....</i>	<i>357 millones.</i>

Luego si se hiciera un empréstito superior á esta cifra, sería preciso liquidar una gran parte de la cartera de particulares ó lanzar al mercado, produciendo la natural perturbación, valores públicos. No hay para qué encarecer cuán desastroso sería el resultado, sobre todo cuando el Banco, que procura colocarse en condiciones de reemplazar su cartera del Tesoro por una cartera comercial, se ocupó en dar el debido desarrollo á las operaciones mercantiles, reformando en tal sentido sus Estatutos y prestando sobre valores industriales. Los efectos de esta medida habrían de ser sensibles trastornos, quiebras dolorosas é irreparables perjuicios.

El art. 4.º merece también aclaración; aunque el Banco entiende que, en los términos en que se halla concebido, no puede desprenderse de él otra cosa sino que únicamente el departamento de emisión, que



radica en las oficinas centrales, es el obligado á la conversión de billetes por metálico ó al contrario; y no hay para qué señalar el efecto que, en daño mismo del billete, produciría la no conversión en Sucursales, que, por otra parte, no sería posible disponer, dado el modo como se pretende organizar el Banco.

El art. 6.º no puede menos de estimarse peligroso. Hallándose hoy bien acreditado el billete del Banco, señal evidente de la confianza que éste inspira, gracias á la cual ha podido prestar señalados servicios al Tesoro y al país, puede infundir cierta alarma y alguna sospecha la declaración, que es innecesaria, de que el billete tendrá curso legal en España y sus posesiones, y será admitido en las Cajas públicas y por los particulares, salvo las estipulaciones expresas en contrario; salvedad, asimismo, que puede determinar recelos y desconfianzas que hoy no existen.

Por último, el art. 7.º contiene una autorización amplísima, que parece rectificar la ley autorizando la creación de Obligaciones, para emitir y negociar Deuda del Estado, no fijando siquiera la cantidad. Autorizaciones semejantes parece que deben ir fundadas en motivos que demuestren su conveniencia, consignando además en los presupuestos las cantidades correspondientes para la dotación de las obligaciones que produzcan y de los intereses que en virtud de ellas se han de satisfacer.

En resumen, el Banco de España opina, y así tiene el honor de informar, con el más profundo respeto al Gobierno y lleno de confianza en la sabiduría y rectitud de las Cortes del Reino:

Que el proyecto de que se trata no respeta derechos fundamentales sancionados en pactos solemnes; que rompe con nuestras tradiciones bancarias; que produciría considerables perjuicios al país y una honda perturbación en su vida económica.

Cuando por desgracias y fatalidades, ó errores, ó desaciertos, se produce un estado económico como el que atraviesa España, estima el Banco que no ha de buscarse el remedio del mismo en combinaciones de sistemas que no se fundan en la realidad, sino en una conducta firmemente proseguida de nivelar los presupuestos, y aun procurar excedentes, de atender con recursos propios las obligaciones del Estado, de respetar todos los compromisos, procurando enaltecer su crédito en el interior y en el exterior, de favorecer la producción del país y disminuir las deudas con el extranjero, de fomentar los hábitos de ahorro y de reconstituir económicamente la Nación, des-  
envolviendo la producción de la riqueza.

Para tan elevados fines pueden siempre las Cortes y el Gobierno contar con el concurso decidido del Banco de España, que, si en cumplimiento de un deber que nace de profunda convicción, ha expuesto lealmente su criterio en un problema que, no por afectarle de una manera directa, deja de revestir carácter nacional; se ha manifestado en todo momento dispuesto á armonizar su derecho con el bien público, jamás desatendido por el Banco.

Madrid 7 de Febrero de 1902.

*Por el Banco de España  
y por acuerdo unánime de su Consejo de Gobierno*

El Subgobernador 1.º,

*Benito Farina.*

Cuando por desgracia y fatalidad, o errores, o descuidos, se produce un estado económico como el que tristemente España está en el punto que no ha de pasar al terreno del mismo en condiciones de sistemas que no se fundan en la realidad, sino en una concepción meramente prosaica de nivelar los presupuestos y sin tener en cuenta las necesidades de inversión, de mejorar las condiciones de crédito en el interior y en el exterior, de mejorar la producción del país y disminuir las deudas con el extranjero, de fomentar las industrias de ahorro y de reconstruir económicamente la Nación, desatendiendo la producción de la riqueza.

Para tan elevados fines pueden servir las leyes y el Gobierno con el concurso decidido del Banco de España, que si en cumplimiento de un deber que nace de profunda convicción, ha expuesto también su criterio en un problema que no por ser de una manera directa, deja de requerir carácter nacional, se ha manifestado en todo momento dispuesto a armonizar su decisión con el bien público, jamás desatendiendo por el Banco.

Madrid 7 de Febrero de 1902.

Por el Banco de España

y por acuerdo unánime de su Consejo de Gobierno

El Subgobernador 1.º

Benito Barina











